


**NOTA DE LA ASESORIA JURÍDICA SOBRE EL CARÁCTER Y EFECTOS DE LAS RESERVAS
POR DAÑOS, RETRASOS O FALTA DE ENTREGA DE LOS OBJETOS TRANSPORTADOS
EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA NACIONAL Y EN EL INTERNACIONAL**

Las reservas que puede formular el destinatario al porteador por daños, retrasos o falta de entrega de los objetos transportados, no tendrían por qué tener unos efectos distintos en el transporte nacional que en el internacional. No obstante, la circunstancia de que uno y otro no se regulen por la misma normativa --el nacional se rige por el Código de comercio mientras que el internacional por el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR), hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956 y ratificado por España el 12 de septiembre de 1972-- hace que, contra todo pronóstico, las reservas tengan un significado y un alcance diferentes en una y otra clase de transporte, pese a que en ambos casos responden al mismo propósito: protestar o hacer saber al porteador la disconformidad del destinatario respecto a cómo se han cumplido por aquél las obligaciones derivadas del contrato de transporte celebrado con el cargador.

El Código de comercio, al ocuparse en el artículo 952,2º del ejercicio de las acciones sobre entrega del cargamento o sobre indemnización por los retrasos o daños sufridos en los objetos transportados, somete su ejercicio al plazo de prescripción de un año, contado desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de destino, o del en que debía verificarse según las condiciones del transporte. Dicho ejercicio, sin embargo, se encuentra condicionado al requisito de procedibilidad de tener que haber formulado previamente la correspondiente protesta o reserva en los términos que establece el artículo 366 del mismo Código. Este precepto señala que tendrá que hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercancías, cuando se trate de daños o averías que no apareciesen en el exterior de los bultos, sino al abrirllos, o al tiempo del recibo en caso contrario, o sea cuando se conozcan por la parte exterior de los mismos las señales del daño o la avería, siendo estos plazos de caducidad por cuanto una vez transcurridos no se admitirá reclamación alguna contra el porteador sobre el estado en que entregó los géneros porteados, decayendo, por tanto, el derecho a reclamar del destinatario.

Esta norma, que determina en nuestro Derecho una fundamental exigencia en orden al ejercicio de las acciones derivadas del anormal cumplimiento del contrato de transporte, sufre una modificación en el transporte internacional, en donde la formalización de la reserva supone, no ya aquel requisito de procedibilidad sino, tan solo, la quiebra de la presunción “iuris tantum”, o sea que admite prueba en contrario, de que las mercancías fueron entregadas conforme aparecen descritas en la carta de porte. Concretamente, el artículo 30 del Convenio CMR condiciona la destrucción de dicha presunción a la formulación al transportista de las oportunas reservas indicando la naturaleza general de la pérdida o la avería, o protestando por el retraso, bien al tiempo de la entrega, o dentro de los siete días hábiles siguientes tratándose de averías o pérdidas ocultas, o en los veintiún días siguientes a la puesta de las mercancías a disposición del destinatario en caso de retraso. Con lo que la ausencia de protesta o reserva por parte del receptor no impide el ulterior ejercicio de la acción, pero le coloca en una situación de desigualdad respecto del transportista al obligarle a la siempre dificultosa prueba de tener que destruir la presunción de adecuado cumplimiento por el transportista en la que le ha puesto su omisión.

De lo que se desprende que **los efectos de las reservas a que nos hemos referido son diferentes y mucho más relevantes en el transporte nacional que en el internacional**, tal como, además, lo viene a reconocer casi en los mismos términos que hemos dejado expuestos la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 13 de octubre de 2.000.



Manuel Mª Vicens Matas
Secretario y Asesor Jurídico